

La derrota sandinista y el nuevo cuadro regional

Gabriel Gaspar

Las recientes elecciones nicaragüenses ingresarán a la historia como uno de los casos de mayor sorpresa electoral. Cuando todos los vaticinios auguraban un triunfo de Daniel Ortega, el escrutinio arrojó desde los primeros momentos un amplio triunfo para la candidata de la Unión Nacional Opositora (UNO), doña Violeta Barrios Vda. de Chamorro.

Las elecciones nicaragüenses no fueron las únicas en la región centroamericana; en los primeros días de febrero los costarricenses acudieron a las urnas y otorgaron el triunfo al candidato del Partido Unidad Social Cristiana, Rafael Ángel Calderón Fournier. En noviembre de 1989, en las elecciones hondureñas, Rafael Leonardo Callejas, abanderado del Partido Nacional, derrotó a su vez a Flores Facusse, candidato del Partido Liberal. A estos resultados podemos sumar la victoria de ARENA sobre la democracia cristiana salvadoreña en marzo de 1989, que permitió acceder a la primera magistratura a Alfredo Cristiani. Para completar el cuadro, es preciso advertir que en noviembre del presente año, los guatemaltecos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Vinicio Cerezo. De esta manera, en poco más de año y medio la totalidad de los países de la región han llevado a cabo procesos electorales y, como producto de ellos, se ha operado una significativa modificación del cuadro regional de fuerzas.

En estas notas trataremos de analizar las repercusiones que para el conjunto de la región tendrán estos procesos electorales. Para ello intentaremos destacar, más que un examen de cada proceso nacional, los efectos globales. En una primera aproximación abordaremos los siguientes:

- a) La consolidación de sistemas políticos basados en elecciones competitivas para designar a los gobernantes.
- b) La emergencia de una derecha renovada en la región centroamericana portadora de un proyecto de reorganización económica y que reivindica la democracia política.
- c) La constitución de un bloque de países aliados de Estados Unidos con mayor legitimidad.
- d) El predominio de las opciones pacifistas y democratizadoras sobre ópticas de transformación social.

Estos efectos globales se analizarán por separado, sin detenernos en el examen particular de cada caso, para luego intentar una evaluación general.

La consolidación de sistemas políticos

A comienzos de la crisis regional —y habría que agregar que como práctica de muchas décadas—, la totalidad de los países centroamericanos, con la excepción de Costa Rica, se encontraban gobernados por diferentes regímenes militares. A comienzos de los noventa la situación parecía haber cambiado, no sólo como característica regional, sino generalizada para el resto de Latinoamérica. En efecto, a comienzos de los noventa, salvo el gobierno haitiano, todos los gobernantes actuales han surgido de consultas electorales.¹

Pero, se podría contraargumentar: en la mayoría de los países centroamericanos, siempre ha habido elecciones; es más, la mayoría de los gobiernos militares utilizaban el recurso electoral apoyándose en partidos oficiales que, merced al fraude y a la intimidación, pretendían aplicar un barniz democratizador a los gobiernos oligárquicos.

Lo anterior es cierto, las elecciones no son nuevas en Centroamérica. ¿Qué es lo nuevo entonces? En nuestra opinión lo nuevo radica en que se propicia que participe la oposición, que se cuenten los votos y, que en los casos en que gana la oposición, ésta puede acceder al gobierno. Es decir, que es real la alternancia.

La alternancia en Centroamérica es un hecho. En esta ronda electoral de fines de los ochenta y comienzos de los noventa, en todas las elecciones ha triunfado la oposición. Es más, ésta es una tendencia que también se ha corroborado en el resto de la región latinoamericana.² Pero la afirmación anterior debe ser matizada. Si bien es posible encontrar alternancias efectivas en los recientes procesos electorales, cabría preguntarse si en todos ellos han podido participar todos los sectores políticos. Un examen objetivo indicaría que para los casos de El Salvador y Guatemala la respuesta es negativa; vale decir, no todos pueden participar; se trata en concreto de las fuerzas que hoy se identifican con las organizaciones insurgentes. Se podría argumentar que no participan porque no quieren, pues se trata de organizaciones que profesan ideologías no democráticas, extremistas, y que además descartan su participación electoral. Pero lo cierto es que tanto el FMLN salvadoreño como la URNG guatemalteca han incorporado a sus plataformas programáticas la solución política negociada, e incluso han sugerido su participación electoral si se dan normas mínimas que garanticen un proceso justo.³

Si la alternancia va acompañada de un esfuerzo por facilitar la incorporación al sistema político, el mayor mérito lo encontramos en el caso nicaragüense; el sandinismo está demostrando que es democrático en las buenas y en las malas. ¿Pueden las oligarquías guatemaltecas y salvadoreñas demostrar lo mismo? De esta manera, un buen indicador respecto al grado de democratización de estos procesos electorales, lo da el examen de si el sistema permite la incorporación plena de todas las fuerzas políticas. Al respecto, es necesario hacer diferencias.

En los casos de Costa Rica y Nicaragua, es posible observar que en los procesos electorales participan las principales fuerzas políticas del país.⁴ En un extremo opuesto encontramos a la situación guatemalteca y salvadoreña; allí, tanto el FMLN como la URNG, y en general el espectro izquierdista del arco político, no sólo carece de posibilidades de participación, sino además es perseguido sistemáticamente. En una situación intermedia encontramos el caso hondureño, dado que allí, si bien participan en el proceso electoral las principales fuerzas (nacionales y liberales), el resto de ellas, desde el moderado PINU hasta la izquierda, no tienen mayores facilidades para consolidar su presencia. La circunstancia de que la izquierda hondureña sea pequeña, no invalida nuestra observación.

De esta manera, la democracia que nace en Centroamérica, para muchos países, tiene el signo de la "baja intensidad", como tan acertadamente lo ha calificado Edelberto Torres Rivas. En otras palabras, la consolidación de sistemas políticos que se basan en elecciones para designar a sus gobernantes, no puede interpretarse linealmente como sinónimo de democratización. En algunos casos, la liberalización política que se observa tiene como fundamento la necesidad de elevar los niveles de legitimación estatal a fin de asegurar la preservación del sistema económico-social.

Ésta es una discusión que no por antigua está totalmente agotada. Si entendemos a la democracia no como un método⁵ sino como una condición social, entonces tenemos que impugnar el grado de democratización que pueda darse en sociedades donde no se permite el pluralismo, se persigue a los disidentes, se violan los derechos humanos y el poder civil no logra subordinar al poder militar. Todos estos aspectos, entre otros, son característicos de la vida cotidiana de muchos países centroamericanos, a pesar de que en ellos se lleven a cabo procesos electorales con rigurosa regularidad desde hace algunos años.

En el saldo positivo de este proceso, encontramos que la idea de la confrontación de ideas más que de fuerza, la preocupación por el consenso y el interés por convencer al electorado, son síntomas que van a la par de los procesos electorales. Por supuesto, la creciente tecnificación de estos procesos, de la utilización de complejas técnicas de *marketing* político, hacen necesario legislar a fin de asegurar normas igualitarias de participación, sobre todo en los medios de comunicación. De lo contrario, quienes posean más recursos económicos tendrán mayores ventajas en su participación.

La emergencia de una derecha renovada

Otro aspecto que sobresale en esta coyuntura regional es el ascenso de fórmulas políticas que se identifican con la economía de mercado. O sea, el triunfo de la derecha, que a veces se identifica tal cual, o en otras se define como "centro-derecha".

En efecto, tanto ARENA como el PUSC y el Partido Nacional Hondureño constituyen las principales expresiones de la derecha del arco político de sus respectivos países. Pero esta afirmación puede ser ampliada. Si bien

es cierto que las tres fuerzas aludidas están en la extrema derecha del arco político-ideológico, no es del todo exacto caracterizarlas como conservadoras.

En nuestra opinión, los hechos recientes permiten observar que ha madurado un proceso de recomposición de la representación política bajo Pinochet.

Es muy discutible que este nuevo paradigma neoliberal sea capaz de posibilitar un desarrollo capitalista partiendo de las actuales condiciones de las economías centroamericanas. Al respecto, atendiendo a los logros de estabilización, crecimiento y diversificación alcanzados por la economía chilena en los últimos años, que los intelectuales del saliente régimen militar atribuyen exclusivamente a la política económica aplicada por los discípulos chilenos de Friedman, cabe hacer más de un comentario.

Una difundida argumentación crítica es aquella que hace referencia al llamado "costo social" que acompaña a este tipo de políticas, pero no queremos aquí detenernos en ella, sin que esto signifique negar su importancia en materia no sólo de equidad social, sino también en sus repercusiones en materia de estabilidad política. Lo que nos llama la atención es la manera acrítica en que buena parte del sector privado centroamericano ha hecho suyas las tesis del neoliberalismo, sin detenerse a considerar las bases de las cuales partirían en este "ajuste". Y aquí cabe volver al examen de la situación chilena.

En Chile, al iniciarse el gobierno militar, merced a dos medidas adoptadas por el gobierno socialista de Salvador Allende existían condiciones que allanaron el camino de la modernidad económica. Ésas eran la nacionalización del cobre y la reforma agraria. Mediante la primera, el Estado se apropió del excedente generado por el principal recurso exportador del país, lo cual libró a la conducción económica chilena de un problema cuasi

insoluble de la mayoría de las economías latinoamericanas: cómo redistribuir, en el conjunto de la economía, las divisas obtenidas por el sector externo, o cómo convencer a los propietarios —sean mineros o agroexportadores— de que parte de sus ganancias debían servir para diversificar el resto del aparato productivo.

Por su parte, la reforma agraria chilena, iniciada por el democristiano Eduardo Frei y profundizada en los tres años del gobierno de la Unidad Popular, acabó con el latifundio. Pinochet privatizó las cooperativas reformadas, pero no reconstruyó la vieja hacienda. Surgió así una extendida capa de medianos empresarios agrícolas de alta productividad, que basaron su acumulación en el uso intensivo de la tierra, a diferencia de los latifundistas de antaño, cuyos principales recursos productivos eran la extensión de la tierra y el bajo costo de la fuerza de trabajo. Es este grupo de nuevos propietarios agrícolas, verdaderos empresarios surgidos del fin del latifundio, quienes protagonizan la diversificación agrícola chilena de estos años, en especial, de su sector frutícola exportador.

Aplicar la receta chilena a la situación de Centroamérica supondría que las clases dominantes estarían dispuestas a aceptar, como condición previa para modernizar el aparato productivo, nacionalizaciones del café, del algodón o de complejos frutícolas exportadores, según sea el caso. Y además, tendrían que aceptar llevar adelante una reforma agraria que liquidase a la hacienda improductiva. Para cualquier observador con alguna distancia, un escenario de esa naturaleza pertenece virtualmente al mundo de la ciencia ficción.

Sin embargo, independientemente del grado de viabilidad que tenga un ajuste de tipo neoliberal para las economías centroamericanas, lo cierto es que ante los convulsos sucesos de Europa del Este y la caótica situación económica latinoamericana, las tesis del liberalis-



mo económico adquieren una particular solidez ideológica, en medio de un desconcierto generalizado por parte de todos aquellos que propugnan diferentes formas de intervención estatal.

En los comienzos de la crisis centroamericana se levantaba con fuerza un proyecto fundacional de corte nacional popular, el cual reivindicaba una profunda reorganización de la economía y un cuestionamiento del sistema político. Era el proyecto de "las izquierdas", fueran las armadas o las no armadas, con arrastre de masas o margina-

les. Pero no era el único proyecto fundacional; a inicios de los ochenta, la opción de corte democristiano también adquirió una particular fuerza en la región, combinando democratización con reformas y compartiendo con la izquierda su crítica al Estado oligarca.

En ese cuadro, la oligarquía centroamericana carecía de un proyecto globalizante alternativo, y más aún de un proyecto que pudiese considerarse más justo, eficiente y moderno que los propuestos. Hoy, diez años después, la región conoce los límites y las posibilidades de la democracia cristiana, también conoce los costos de un proceso de transformación social como el que encabezaron los sandinistas, sabe de la voluntad implacable de la administración norteamericana por hostilizar cualquier alternativa que considere contraria a sus intereses. En dicho contexto, la derecha se rearmó ideológica y programáticamente, y hoy cosecha.

Sin embargo, la reivindicación de la democracia ocupa un lugar destacado en la nueva propuesta de los sectores dominantes, de sus partidos políticos e intelectuales. Pese a que la concepción de democracia que fluye de esta propuesta está circunscrita a las dimensiones del régimen político, esto constituye un avance de proporciones en relación con la apatía, cuando no a la indiferencia, que las clases dominantes manifestaron en el pasado respecto a la tarea democrática.

Dado su comportamiento histórico, con la destacada excepción del caso de Costa Rica, la derecha centroamericana tiene que demostrar que su alegato democrático no es sólo un recurso electoral, o un mecanismo para legitimar su dominación. Por el contrario, el sandinismo (y por su mediación la izquierda centroamericana) ha demostrado con su conducta que su convicción y su comportamiento democrático son sólidos. ¿Podrán las oligarquías centroamericanas emular al sandinismo en este tipo de actitud? ¿Podría ARENA, por ejemplo, convocar a elección

nes y dar garantías a las clases dominantes centroamericanas? En ese proceso, el bloque dominante ha asumido un nuevo perfil que en lo básico hace suyas las tesis del neoliberalismo como doctrina económica al tratar de construir un sistema político basado en elecciones competitivas, mediante una lógica de guerra fría en lo que respecta a las relaciones internacionales.

Esta propuesta quizás no es tan original como para permitir la denominación de "nueva derecha", pero sí es diferente de la propuesta que enarbolaría la derecha centroamericana antes de la crisis. En efecto, salvo destacadas excepciones, los partidos de derecha, los gremios empresariales y la intelectualidad del sistema, hasta la década de los setenta, no pretendían mayores modificaciones al sistema de la hacienda agroexportadora tradicional, nunca se preocuparon por la democracia y se acomodaron a la convivencia con regímenes militares que les garantizaban el orden social necesario para desarrollar sus actividades.

Este último no es el perfil de la campaña de Cristiani, ni de Calderón ni de Callejas. En lo referente a la UNO nicaragüense, si bien representa una coalición abigarrada donde hasta hay comunistas, es indudable que en su seno, son los sectores económicamente dominantes los que tienen una posición de dirigencia.

Este proceso de recomposición de la representación política de las clases dominantes generalmente ha ido acompañado de una politización ascendente de los gremios empresariales, donde los sectores propietarios centroamericanos se parapetaron defensivamente en los primeros años de la crisis. Al respecto, las movilizaciones que el CACIF guatemalteco y la ANEP salvadoreña promovieron en contra de los gobiernos democristianos en sus países, son una buena expresión de esta aludida politización empresarial. En el contenido de esta activación del sector privado, destaca la demanda por

abandonar todo signo de estatismo en la conducción económica. En ello engloban a las propuestas económicas de la democracia cristiana, a las de economía mixta como la nicaragüense, y por supuesto, a las tesis de economías centralmente planificadas como las que sugiere la izquierda. El nuevo paradigma es la diversificación de exportaciones, la liberalización de la economía, entendida como su privatización, promoviendo para ello lo que se ha conocido como el "ajuste estructural". Las experiencias por seguir serían las de los países del sudeste asiático y la economía chilena de todos los sectores, amnistía a los presos políticos, flexibilizar la legislación electoral, permitir observadores internacionales sin exigir al mismo tiempo el desarme previo de la insurgencia.

La conformación de un nuevo bloque de aliados de Estados Unidos

En los inicios de la crisis, la administración norteamericana tenía un problema: sus más fieles aliados centroamericanos estaban muy deslegitimados. Esta circunstancia se agravaba más cuando se contrastaba con los objetivos de la política centroamericana que profesaba la Casa Blanca: defender la democracia en la región, amenazada por el expansionismo soviético y sus aliados.

Resultaba muy contradictorio defender la democracia apoyando a las dictaduras que poblaban la región a fines de la década de los setenta. Esto no era sólo un problema para la diplomacia del Departamento de Estado, también era una grave dificultad convencer a los congresistas, a los formadores de opinión pública, y a la ciudadanía en general, de que al aumentar la ayuda a los militares centroamericanos se estaba defendiendo a la democracia. Si la Casa Blanca quería establecer un con-

senso interno mínimo para su operación centroamericana, debía disponer de aliados más legitimados.

De esta manera, es posible entender que la preocupación de la Casa Blanca por promover procesos electorales competitivos y alternancias efectivas, era una necesidad vital para acompañar su estrategia contrainsurgente. Pero no queremos exagerar, dado que no falta la crítica de izquierda que tiende a ver que todo el esfuerzo por establecer liberalizaciones políticas forma parte de complejos y astutos planes del Pentágono. Desde todo punto de vista, es preferible, en nuestra opinión, una derecha que haga mítines, que trate de convencer por medio de la propaganda, que presente programas, a una derecha que use escuadrones, o que queme cosechas de cooperativas o asesine alfabetizadores o catequistas.

Tampoco hay que entender que la generalización de procesos electorales en la región es resultado exclusivo de los afanes de la Casa Blanca por disponer de aliados legítimos. La democratización política es una demanda de vastos sectores de las sociedades centroamericanas, desde antes de la crisis. No sólo es una demanda proveniente de sectores ubicados a la izquierda, es una demanda de los socialcristianos, de los socialdemócratas, de las iglesias, del movimiento sindical, de las universidades, de los intelectuales democráticos, entre otros.

Pero el balance que queremos destacar, no es sólo el tipo de sistema político que se está instaurando en los países centroamericanos, sino que, como resultado de las justas electorales, se ha constituido un conjunto de gobiernos que se perciben a sí mismos como aliados de E.U.A. En el inicio de la década de los noventa, la administración norteamericana dispone de un conjunto de aliados legitimados no sólo ante la comunidad internacional, sino también en buena medida, legitimados en el interior del sistema político norteamericano.⁷

Sin embargo, de la afirmación anterior no es posible deducir que se trata de un bloque homogéneo, dispuesto a respaldar todas y cada una de las acciones que proponga la Casa Blanca. En materia de pacificación regional, de desarme, y de tratamiento a las Fuerzas Armadas, es posible advertir diferencias entre los nuevos gobiernos que emergen.

En relación con la forma de percibir la pacificación, en un extremo tenemos al gobierno del PUSC costarricense, que en lo fundamental intentará impulsar el espíritu de Esquipulas, es decir, buscará fórmulas parecidas a la nicaragüense. En el otro extremo tenemos al gobierno de ARENA, que hasta la fecha entiende pacificación como rendición de la insurgencia o guerra total. Estas diferencias indudablemente repercutirán a la hora de que Estados Unidos defina un curso de acción luego de la transición en Nicaragua.

Lo mismo podemos decir en relación con el ya insinuado tema del desarme general en la región. Esta perspectiva sería de extrema utilidad para el gobierno de Violeta Chamorro, de Calderón, e incluso para los gobiernos de Honduras y Guatemala (no así para los ejércitos de estos últimos países). En esta convergencia de intereses podría hasta coincidir el gobierno norteamericano. Por su parte, el gobierno salvadoreño nunca podría respaldar un planteamiento de esta naturaleza, salvo que llegase a un acuerdo global con la insurgencia en promover una salida política.

Como se ve, Estados Unidos puede congratularse de disponer hoy de aliados legitimados en la región, pero cometería un grave error si los confundiese con aliados incondicionales para cualquier política.

En los párrafos anteriores hemos destacado la posibilidad de discrepancias entre la política norteamericana con sectores conservadores de corte civilista. Pero también se abre un campo de eventuales contradicciones



entre los norteamericanos y los "duros" de la derecha. En efecto, en la mayoría de los procesos electorales recientes —no es sólo una peculiaridad de Centroamérica—, es posible advertir la emergencia de un perfil "populista" que asumen los sectores de extrema derecha. El posicionamiento actual del mayor Roberto D'Aubuisson es un ejemplo de esto; en su opinión, los "bobbies" que se han enquistado en el gobierno, que hablan y piensan en inglés, son insensibles a los sentimientos de la población, adoptan políticas económicas que amenazan a los hombres de trabajo, y para colmo de males, estarían dispuestos a negociar con los terroristas.⁸ Este sector, más explicable por sus posiciones ideológicas que atribuible a identidades productivas, teme a lo que denominan "el síndrome de Carter", es decir, que a raíz de consideraciones de política interna, los norteamericanos, llegado el caso, estarían dispuestos a sacrificar a sus aliados más leales.

Cabe destacar que esta percepción de "abandono latente" también es muy fuerte en el interior de las fuerzas armadas, sensibles a este tipo de discurso, lo cual explica que, por lo general, los "duros" del ejército tienden a identificarse con la ultraderecha en una crítica ultranacionalista con respecto a Estados Unidos, lo cual no impide que en determinados momentos asuman posiciones de corte populista. Los autodenominados "oficiales de la montaña" del ejército guatemalteco, quienes firman como "Juan Arena" en El Salvador y los sectores más ultras de las fuerzas armadas hondureñas, representan a esta tendencia.

A nivel latinoamericano hay rasgos comunes con esta corriente en los llamados "carapintadas" de las fuerzas armadas argentinas, dirigidas por el mayor Rico y el coronel Seineldin. En el caso de Chile se encuentra la oficialidad fanática, que hasta la fecha ha aceptado a

regañadientes la transición democrática. No es casual que aparte de los repudios de la juventud izquierdista uruguaya, la única contramanifestación que sufrió el vicepresidente Quayle en su reciente viaje a Sudamérica, provino de parte de algunos centenares de pinochetistas furiosos que acusaban al gobierno norteamericano de haber influido en la derrota de la dictadura.⁹

En el caso centroamericano, además de estas contradicciones de tipo político-ideológico que eventualmente puede tener o ha tenido el gobierno norteamericano con la ultraderecha, y en especial con el sector duro de las fuerzas armadas, existen dos puntos de conflicto que son muy difíciles de digerir para los norteamericanos. Éstos son la violación de los derechos humanos y el involucramiento con las redes de narcotráfico.



Ambos temas son difíciles de rastrear en profundidad, pero para nadie es un misterio que hay vasos comunicantes entre los escuadrones de la muerte y los servicios de seguridad. El reciente asesinato de los jesuitas salvadoreños ha permitido sacar a la luz la sordidez de estas prácticas, pero desgraciadamente no es un caso único ni tampoco novedoso para la mayoría de la población centroamericana.

El narcotráfico está ligado en parte a quienes controlan espacios aéreos, aduanas, fronteras y afines. A la fecha hay indicios que vinculan directamente a sectores de la oficialidad hondureña con los narcos, lo mismo con oficiales salvadoreños, y está por demás agregar el caso de la contra ya puesto de relieve con las revelaciones del caso Irangate. El control del narcotráfico interesa y preocupa a la mayoría de la población norteamericana, por lo cual su gobierno no puede aparecer empleándose a fondo como en el caso de Panamá y Noriega, y al mismo tiempo, hacer la vista gorda con otros militares latinoamericanos sólo por el hecho de que estos últimos, eventualmente combaten contra enemigos políticos comunes.¹⁰ Esta circunstancia marca un límite para el apoyo norteamericano: cualquier fuerza de derecha que se involucre en el narcotráfico, por más prooccidental que sea, por más anticomunismo que profese, a la larga tendrá dificultades con las agencias norteamericanas.

El surgimiento de un nuevo paradigma, la pacificación y la democratización

Hemos querido dejar al final esta última reflexión que las elecciones nicaragüenses nos provoca. En los comienzos de la década pasada, en la mayoría de la región, existía un relativo predominio de las ideas del cambio social. Puntos más, puntos menos, buena parte

de la sociedad asimilaba como válidas las tesis que cuestionaban a la sociedad oligárquica, tradicional e ineficiente en lo económico, y antidemocrática en lo político, amén de injusta en lo social.

El triunfo de la revolución sandinista proporcionó un enorme impulso a estas concepciones, el incremento de la movilización política y social en El Salvador y Guatemala fueron expresión del nuevo nivel que alcanzaba la crítica social. Esta crítica a la vieja sociedad oligárquica era además compartida por instituciones académicas, por importantes sectores de la iglesia católica y reforzada por los diagnósticos de organismos internacionales como la CEPAL, la UNESCO y el PNUD.

Retomando lo anterior, podríamos sintetizarlo destacando el hecho de que, desde el punto de vista de las ideas, el liberalismo se encontraba a la defensiva y los proyectos políticos que se identificaban con su crítica, eran los predominantes. Actualmente no es necesariamente así, pero nuevamente hay que cuidarse de exagerar. Hoy en día se argumenta en algunos sectores que en Centroamérica ha concluido el ciclo de las revoluciones y que se ingresa al de la democracia y las elecciones. Con más prudencia, otros autores se aproximan a la idea de que con la derrota electoral de los sandinistas se completa todo un periodo en la historia latinoamericana iniciado con la revolución cubana.¹¹

Son muchos los que se apresuran a enlazar el triunfo de la UNO con los fenómenos de Europa del Este, según los cuales estos hechos expresan un fenómeno universal: el derrumbe del socialismo.¹² Pero en este tipo de interpretaciones, cargadas de voluntarismo, se transfiere a la derecha el mismo síndrome de los "catastrofistas" de izquierda, que desde hace décadas, ante cada tropiezo del capitalismo, se apresuran a hablar de crisis general y última.¹³ Obviamente, el clima ideológico de las sociedades centroamericanas ha evolucionado en

estos años. Para analizar esta evolución, nos inclinamos por la vieja tesis de que son los procesos sociales los que generan pensamiento social. Entonces, cabe preguntarse qué ha pasado en estos años en Centroamérica que ha llevado a un segundo plano —inclusivo al rechazo de grandes sectores— las tesis de la transformación social.

Éste es un tema de largo aliento, y aquí sólo queremos enunciar algunas hipótesis a partir del reconocimiento obvio de que la mayoría de la región ha vivido una situación de guerra. Esto nos provoca muchos interrogantes respecto al impacto que produce un conflicto prolongado, pero hoy sólo queremos detenernos en la que consideramos de mayor importancia en relación con las elecciones recientes. La presunción principal podríamos enunciarla de la siguiente manera: la prolongación de la crisis, en particular de los efectos de la guerra sobre la población, ha alimentado una nueva idea fuerza cuya solución, para numerosos sectores de las sociedades afectadas, adquiere la primera prioridad. Esta nueva idea fuerza es la voluntad nacional de la pacificación.

Desde este punto de vista, todo aquello que sea percibido como factor de continuidad del conflicto tiene que considerarse costoso. En determinados casos —como el nicaragüense— la persistencia en los proyectos de transformación social tendría como consecuencia inevitable, no querida pero segura, la prolongación de la guerra. Por tanto, el liderazgo de la pacificación estaría en disputa por parte de las diversas fuerzas políticas. Aquélla que sea capaz de ofrecer a la población una alternativa viable, cercana y real de paz, puede reunir mayorías en torno suyo. Esto no debe entenderse como un triunfo ideológico del liberalismo en todos y cada uno de los casos, sino como el agotamiento de sociedades que han sufrido más años de guerra que los que sufrieron los pueblos de Europa en la Segunda Guerra Mundial.

Esta voluntad pacifista en el caso centroamericano va unida a una idea que cobra fuerza en toda la región latinoamericana: la idea de la democracia. No faltará quien con mucha razón recuerde que al respecto habría que precisar "de qué democracia hablamos", pero aún asumiendo la validez de dicha observación, nos inclinamos a considerar como muy positivo que la demanda de paz vaya asociada en la mayoría de los casos a la vigencia de formas de gobierno basadas en el sufragio. No está demás recordar que la demanda de orden y estabilidad en muchos casos ha impulsado a legitimar fórmulas autoritarias de gobierno. En nuestra opinión éste no es el caso del istmo centroamericano.

Notas finales

A la fecha de cierre de estas notas, se han acentuado importantes procesos cuyo desarrollo enmarca a todo el acontecer mundial. La victoria de la derecha en las elecciones de la RDA (otra "sorpresa" electoral) sumada a los vaivenes de la situación interna de la URSS son procesos de una magnitud tal que coparán durante mucho tiempo la atención de los principales actores internacionales.

En ese cuadro, en la región centroamericana se ha operado un significativo proceso de recomposición de los equilibrios políticos. En esta oportunidad hemos querido subrayar algunos de los efectos globales que los recientes procesos electorales han generado, pero aún están pendientes dos procesos nacionales cuyo desenlace puede provocar alteraciones a lo aquí expuesto. Estos procesos son la transición nicaragüense y las negociaciones de paz en El Salvador.

En lo que respecta a la transición en Nicaragua, buena parte de este proceso depende de la solución final

del problema de la contra. Mientras no se desarme, el EPS tendrá fuertes argumentos para justificar su autonomía profesional. Mal que mal, ninguna fuerza armada en el mundo puede tolerar la existencia de una fuerza irregular que cuestione las bases del sistema político que aquélla debe defender. Pero esto puede llevar a un callejón sin salida si la contra aduce argumentos similares —que condiciona su desmovilización a un proceso similar del EPS—. Mas, lo que las elecciones nicaragüenses también demuestran es que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de dicho país aceptaron la validez y legitimidad del sistema político vigente. Sumado a lo anterior, cabría agregar que la unanimidad de los observadores extranjeros atestiguaron que, merced a ese sistema político, pudieron expresarse con libertad todas las fuerzas que participaron.

En definitiva, la suerte de la contra dependerá en gran medida de la actitud que frente a ella adopte el gobierno norteamericano, su principal sustento. En lo que respecta a los gobiernos centroamericanos, la aplicación rigurosa de los diversos acuerdos de las Juntas de Presidentes, permitiría reconocer la legitimidad del sistema político nicaragüense.

El otro caso es más complejo; la pacificación en El Salvador es verbalmente un consenso de la mayoría nacional, pero nuevamente es un consenso equívoco. ARENA y su gobierno entienden por pacificación que el FMLN entregue las armas y se transforme en partido político, pero la enorme ofensiva de noviembre de 1989 demostró a todo el mundo la fuerza militar de la guerrilla, lejana a una situación de precariedad que la obligue a rendirse. El FMLN propone una pacificación como resultado de un proceso que, según sus últimas propuestas, permita depurar al ejército de los sectores involucrados en las violaciones a los derechos humanos y así se garantice un proceso de democratización. En medio de



ambas opciones, hay un vasto número de propuestas mixtas que exponen las fuerzas políticas salvadoreñas restantes.

En nuestra opinión, el problema es que toda negociación medianamente seria, afectaría inevitablemente a dos actores políticos: las fuerzas armadas y el FMLN. Las primeras verían reducida su presencia en el sistema político y afectados su tamaño y composición. Por su parte, el FMLN debería desaparecer.

¿Para cuál de las dos fuerzas son más impagables estos costos? Nos inclinamos a pensar que los más perjudicados pueden ser los sectores "duros" de las fuerzas armadas. Ellos saben que en cualquier negociación serán negociados.

El FMLN, en cambio, es una fuerza político-militar que persigue determinados objetivos políticos susceptibles de desarrollarse también por medios no armados. Además, la insurgencia advierte que si bien hoy está en la cúspide de su poderío militar, no ocurre lo mismo con su poderío político, por lo cual deben traducir con urgencia su fuerza militar en fuerza política. Por ello, aunque costoso, su eventual desarme a cambio de modificaciones sustantivas al sistema político —que entre otras cosas le permita presentarse como contribuyente decisivo de una eventual democratización—, no es un horizonte inaceptable para sus mandos y combatientes. Pero, con esta misma lógica, es de suponer que los "duros" de las Fuerzas Armadas harán lo posible y lo imposible para rechazar cualquier negociación de paz, sea quien sea el mediador —tarea que hoy recae en el Secretario General de la ONU—. Los asesinatos de líderes pacifistas y democráticos son ejemplo del nivel de violencia y efectividad que puede alcanzar la acción de este sector.¹⁴

Dada la autonomía relativa de muchos de los actores políticos salvadoreños respecto al quehacer internacional, nos inclinamos a pensar que aunque el resto de Centroamérica pueda avanzar hacia diversos grados de distensión del conflicto, en El Salvador proseguirá la polarización, transformándose en un nuevo epicentro de la crisis regional. De esta manera, con la consolidación relativa de nuevos sistemas políticos, en cuyo seno a la fecha ha logrado perfilarse una renovación de las fuerzas de derecha, y en el marco ideológico de una demanda mayoritaria de pacificación y democratización, Centroamérica se asoma a una nueva década.

Notas

- 1 Cabe precisar que con esto no extendemos un certificado de transparencia electoral a todos los procesos que se han desarrollado en la región, ni tampoco es posible considerar como gobernante democrático a un gobernante como el panameño Endara, que toma su cargo apoyado en el ejército que invade a su país.
- 2 La afirmación anterior es cierta, salvo el caso del triunfo del Partido Colorado paraguayo, que logró elegir al general Rodríguez con más del 70% de los votos. En todos los comicios del pasado año se impuso la oposición: los peronistas en Argentina, Aylwin en Chile, los blancos con Lacalle en Uruguay, Collor en Brasil. Y para este año nadie piensa que el APRA pueda triunfar en las elecciones de mayo en Perú.
- 3 En efecto, tanto en la ronda de negociaciones entre la URNG y el gobierno de Vinicio Cerezo celebradas en Madrid en el mes de octubre de 1987, como en las diversas propuestas de paz de la guerrilla salvadoreña, ambas fuerzas plantean su participación electoral, inclusive su desarme, si se realizan procesos electorales con garantías mínimas para todos los participantes.
- 4 Podría objetarse que en el caso nicaragüense no estuvo presente la contra, pero ella se ha definido como una fuerza militar y no partidaria. Al mismo tiempo, fue expresa su simpatía por la candidatura de la UNO.
- 5 Hacemos alusión a la distinción de concepciones de la democracia que formulara hace algún tiempo Umberto Cerroni.
- 6 Al respecto, hemos desarrollado un seguimiento de este proceso para el caso salvadoreño en *El Salvador: el ascenso de la nueva derecha*, CINAS, 1989. Pero nos atrevemos a sugerir que buena parte de las tesis allí sustentadas son, con las peculiaridades de cada país, susceptibles de ser extendidas a los otros países centroamericanos.
- 7 Uno de los casos más distintivos de esto lo representa el gobierno de Cristiani, para nadie es un misterio que el Departamento de Estado apostó al triunfo de la DC salvadoreña, y que miró con recelo la victoria de ARENA. Pero hoy Bush, Quayle, Baker y Aronson defienden la gestión arenera de gobierno ante el Senado y la Cámara de Representantes, cuando allí se cuestiona la ayuda que se le brinda.
- 8 Que esta emergencia de un populismo de derecha, crítico del neoliberalismo y de estilo populachero y demagógico no es sólo una exclusividad centroamericana, lo demuestra la candidatura de Errazuriz en las elecciones recientes en Chile, se refleja en parte en el perfil de Pacheco Areco, y en el del peronismo ultramontano.
- 9 Este hecho es de por sí sintomático. En las décadas pasadas, las visitas de vicepresidentes norteamericanos a América Latina, sirvieron para multitudinarias manifestaciones antiimperialistas. Tal fue el caso en los sesenta y los setenta de las visitas de Nixon y Rockefeller. Hoy en día, a pocas semanas de la invasión a Panamá, Dan Quayle es repudiado por amargados pinochetistas.
- 10 En el caso de Honduras, los conflictos han sido particularmente fuertes, y puestos de relieve mediante el secuestro del narcotraficante Ramón Mata Ballesteros y la quema del consulado norteamericano. La responsabilidad que al gobierno le cabe en estos sucesos por omisión, fue manifestada por los nacionales en su crítica al liberalismo gobernante de entonces.
- 11 Esta última idea fue expuesta por Sara Gordon en una entrevista con el autor.
- 12 Al respecto, el muy comentado artículo de Fukuyama es un buen exponente, aun cuando fue previo a las elecciones nicaragüenses.
- 13 Con lo anterior no queremos restar importancia a la enorme dimensión de los procesos de Europa del Este. Pensamos que allí no sólo se está operando un profundo reajuste del sistema político que tiene como común denominador la crítica a lo que podríamos denominar "socialismo real", sino que además se están modificando las bases del orden de la posguerra. El solo hecho de la reunificación alemana sería suficiente para sustentar lo anterior.
- 14 En efecto, el asesinato del padre Ellacuría y sus compañeros, y el secuestro y asesinato de Héctor Ouelí demuestran los niveles a que puede llegar la ultraderecha para oponerse a cualquier negociación.

